

RETOS A LA SEGURIDAD HUMANA EN COLOMBIA

AMÉRICA CELESTE GUEVARA PARRA

Universidad Nacional de Servicio Público, Hungría

Resumen: El siglo XXI se ha caracterizado por una multiplicidad de conflictos internos atravesados por un fuerte componente económico que ha hecho de la pobreza la fuente y el catalizador de las amenazas a la seguridad de las comunidades. Este ha sido el caso del conflicto interno colombiano que ha afectado especialmente a la población civil de las zonas rurales periféricas las cuales, además de encarar constantemente a la violencia, deben enfrentarse al hambre, el olvido y la indiferencia del resto de la población, de ahí que sea posible hablar de violencia estructural. Teniendo en cuenta lo anterior, en este artículo se presenta no solo un contexto caracterizado por una diversidad de actores armados que mantienen una lucha constante con el Estado colombiano y donde el narcotráfico ha sido el principal patrocinador de la guerra, sino también se hace referencia a las secuelas y a los costos que ha dejado la violencia política en el tejido social. A modo de conclusión se destaca que, en una situación de guerra interna, si bien el fin de las hostilidades es de gran importancia en términos de seguridad, es sólo uno de los elementos necesarios para la protección de la dignidad e integridad de los colombianos, dicha protección debe incluir también las esferas social, cultural, económica y la acción pública.

Palabras clave: conflicto armado, seguridad humana, desarrollo humano, violencia estructural.

Abstract: The twenty-first century has been characterized by a multiplicity of internal conflicts with a strong economic component that has made poverty the source and catalyst of threats to the security of communities. This has been the case of the Colombian internal conflict, which has especially affected the civilian population in peripheral rural areas which, in addition to constantly facing violence, must confront hunger, oblivion and indifference from the rest of the population, hence it is possible to speak of structural violence. Taking into account the above, this article presents not only a context characterized by a diversity of armed actors who maintain a constant struggle with the Colombian State and where drug trafficking has been the main sponsor of the war, but also refers to the aftermath and the costs that political violence has left on the social fabric. As a conclusion, it is emphasized that, in a situation of internal war, although the end of hostilities is of great importance in terms of security, it is only one of the elements necessary for the protection of the dignity and integrity of Colombians, such protection must also include the social, cultural, economic and political spheres.

Keywords: Armed Conflict, Human Security, Human Development, Structural Violence.

1. Introducción

El 4 de noviembre de 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, firmaron en Bogotá los acuerdos que buscaban poner fin a más de medio siglo de conflicto. Dichos acuerdos son la segunda versión negociada tras la derrota del plebiscito celebrado el 2 de octubre del

mismo año que pretendía consolidar lo ya firmado por las partes involucradas en agosto. Tras una abstención del 63%, el No a los acuerdos de paz se impuso al Sí con un ajustado 50,2% de los votos procedentes principalmente de las grandes ciudades situadas en su mayoría en las regiones centrales del país, lugares donde el conflicto y la violencia apenas se habían dejado sentir, mientras que el Sí se impuso en las regiones periféricas y rurales históricamente olvidadas por el Estado y directamente afectadas por la violencia (Basset, 2018: 243). Es precisamente sobre esos territorios, regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó o Nariño azotados por las dinámicas del conflicto armado y a la vez marginalizados debido al vacío de presencia estatal, en donde se centra el análisis aquí propuesto. Lo anterior a partir de los conceptos de seguridad humana y violencia estructural, nociones en las cuales se profundizará partiendo de un marco contextual que comprende ciertas particularidades del conflicto colombiano.

2. Contexto del conflicto armado, ¿por qué la larga duración?

Con más de 60 años de historia el conflicto armado colombiano (uno de los más antiguos del mundo) ha involucrado a variados actores y múltiples formas de violencia que han afectado principalmente a la población civil. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (2021) documentó 267.565 muertes relacionadas con el mismo entre 1958 y 2021, de las cuales cuatro de cada cinco han sido civiles. Sin embargo, a pesar de sus dimensiones, la guerra no se ha distribuido de manera homogénea en el tiempo y el espacio. Sobre la violencia del conflicto armado se pueden diferenciar cuatro períodos según su tendencia e intensidad. Desde una violencia baja o marginal entre 1958 y 1982 (9.142 víctimas mortales), a una violencia creciente y continua entre 1983 y 1995 (68.645 víctimas mortales), para continuar con una etapa de agravamiento entre 1996 y 2004 (145.809 víctimas mortales) y pasar a una etapa de desescalamiento entre 2005 y 2018 (35.392 víctimas mortales) (CNMH, 2021).

Tras la firma del acuerdo de paz celebrado en 2016 entre la guerrilla *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC) y el gobierno colombiano encabezado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, la violencia relacionada con el conflicto armado disminuyó significativamente en un primer momento, pero luego tomó nuevas formas y persistieron graves abusos (HRW, 2020). Durante el año 2020, la violencia se registró con una intensidad muy alta, traducida en el aumento de los asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados masivos, masacres y enfrentamientos entre los grupos armados que siguen activos. El recrudecimiento de la violencia, que se venía observando desde que Iván Duque (opositor a los Acuerdos de Paz del gobierno de Santos) asumió la presidencia a finales de 2018, se agravó en el marco de las medidas de aislamiento obligatorio decretadas para mitigar la propagación de la pandemia del Covid 19 (Movimiento Campesino Internacional, 2021). Los grupos armados ilegales han logrado aumentar su presencia territorial: las disidencias de las FARC (excombatientes de este grupo que no se acogieron a los acuerdos de paz) pasaron de operar en 56 municipios en

2018, a hacerlo en 113 municipios a agosto de 2020; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (otro grupo guerrillero) pasó de estar en 99 municipios a más de 160, y los grupos paramilitares operan en algo más de 200 municipios (PARES, 2020).

Ahora bien, tomando como base el período más cruento de la violencia entre 1996 y 2004, se puede afirmar que en Colombia han acontecido todo tipo de horrores y al mismo tiempo: asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, secuestros, violencia sexual, reclutamiento de menores, ataques a poblaciones, acciones militares, minas antipersonales, daños a la propiedad civil, atentados terroristas, sabotajes y despojos (CNMH, 2021). También Colombia es el país con mayor número de desplazados internos en el mundo llegando a los 8.2 millones de personas (ACNUR, 2021) (ver gráfico 1: Personas protegidas o asistidas por ACNUR). Tener en cuenta lo anterior es relevante porque a menudo se presenta a Colombia como la democracia más estable de América Latina, minimizando así las dimensiones de un conflicto que en democracia acumula más desaparecidos que las temidas dictaduras del Cono Sur. De ahí la necesidad de resaltar algunos aspectos contextuales relacionados con las causas que ayuden a comprender la dinámica de los fenómenos relacionados con la violencia que sacude a la nación sudamericana desde hace décadas.

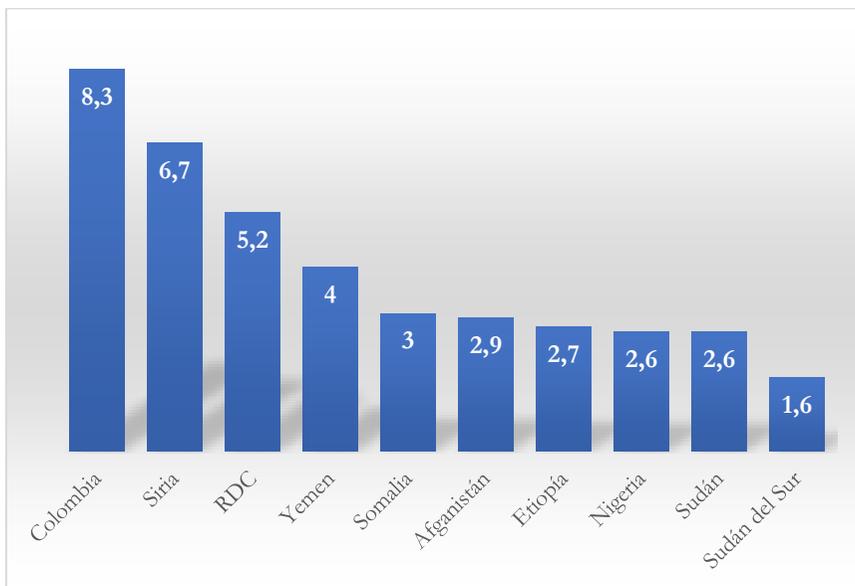


Gráfico 1. Personas protegidas o asistidas por ACNUR.

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por ACNUR, Informe de Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2020)

Entre las causas atribuibles al conflicto se incluyen, por un lado, la debilidad del Estado colombiano y su falta de presencia en el territorio nacional, su incapacidad para ejercer el

monopolio de la fuerza, así como su insuficiencia para crear una identidad nacional fuerte que aglutine amplios sectores de la población. Por otro lado, una causa importante del conflicto está relacionada con la desigualdad respecto a la distribución de la tierra que, a lo largo de la historia, principalmente desde mediados del siglo XX, ha generado diversos grupos guerrilleros, primero liberales y luego comunistas (Segrelles, 2018). También resulta relevante mencionar la falta de inclusión en el sistema político colombiano de movimientos y fuerzas alternativas, lo que ha provocado falta de confianza de la población en las instituciones y ha impedido que muchos sectores expresen sus demandas por la vía democrática. Según el informe *Latinobarómetro 2021*, el 76% de los colombianos afirman que su país es gobernado para grupos poderosos en su propio beneficio mientras que sólo el 18% considera que se gobierna buscando el bienestar de todos, únicamente el 15% estima que la distribución de la riqueza es justa, más del 60% se queja de la injusticia en el acceso a la salud, la educación y el sistema judicial y el 83% está insatisfecho con la democracia (*Latinobarómetro, 2021: 37-46*).

Por su parte, no se puede dejar de advertir que la cocaína ha sido en gran medida el motor del conflicto armado pues se trata de un negocio ilegal muy lucrativo en el que participan diferentes actores incluyendo grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales e incluso políticos, desde el 2006 se han revelado vínculos entre estos últimos y paramilitares (Muñoz, 2019: 13). Ahora bien, previo al auge del narcotráfico, y hasta la crisis del petróleo de 1973, la economía colombiana se basaba principalmente en la exportación de materias primas e hidrocarburos (Caballero, 2019: 137). Sin embargo, la creciente globalización del mercado facilitó el comercio ilegal de sustancias psicoactivas y precedió al boom de la marihuana, cultivo rentable que atrajo todo tipo de inversores y capitales que antes se encontraban en la economía legal. En los años ochenta, debido a los cambios en los patrones de consumo, especialmente en Estados Unidos, la cocaína sustituyó a la marihuana como principal cultivo ilícito de exportación, y cárteles como el de Cali y el de Medellín empezaron a controlar y aterrorizar a todo el país (Cruz, 2008). Hubo una relación, primero de coexistencia, entre los cárteles del narcotráfico y los grupos insurgentes que convivían más o menos en las mismas zonas. Posteriormente, se estableció una relación parasitaria o dependiente, ya que muchos de los cultivos se encontraban en zonas donde la guerrilla estaba presente. Esta última buscó fuentes de financiación y comenzó a cobrar “impuestos” a los cultivadores o a los propios cárteles. A mediados de los años noventa, cuando la guerra contra las drogas se intensificó, la guerrilla decidió explotar los recursos de los territorios que ella misma controlaba (Cruz, 2008). Es así como, en casi cuatro décadas, la violencia relacionada con el narcotráfico ha dejado una profunda huella en la sociedad colombiana y ayuda a explicar uno de los factores que no han permitido ponerle punto final al conflicto. Sin embargo, a continuación, se hará referencia a otro tipo de violencia que permite desvelar problemas estructurales históricos que recaen sobre un Estado que ha sido incapaz de garantizar la seguridad humana de los más desfavorecidos.

3. Seguridad humana y violencia estructural en Colombia

El 21 de noviembre de 2019, cientos de miles de personas salieron a las calles de todo el país para protestar contra diversas medidas neoliberales tomadas por el gobierno del presidente Iván Duque, como una polémica reforma pensional, la disminución del salario mínimo para los menores de 25 años, la reducción de impuestos a las grandes empresas y multinacionales, entre otras medidas. El llamado popular que se reanudó durante el 2021 con mayor fuerza también incluyó reclamos contra la desigualdad y la violencia estructural en el país (Jiménez, 2021: 21). Actualmente, la nación se encuentra nuevamente azotada por un repunte en la violencia política y el conflicto armado, pues grupos guerrilleros y paramilitares siguen activos, hay problemas de corrupción desbordada y de pobreza estructural en las zonas rurales, además de presentar una de las mayores tasas de desempleo, según el DANE (2022b) para abril del 2021 era del 15,5%, entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Pereira – Cruz, 2022). Estas dinámicas afectan especialmente a la población indígena y afrodescendiente que se encuentran en los territorios más golpeados por la violencia y la pobreza y que por lo tanto deben lidiar con riesgo constante de exterminio físico y cultural, el miedo, confinamientos, presión de grupos armados para cultivar coca en detrimento de los cultivos propios, dificultades en el acceso a servicios básicos como la salud, desnutrición crónica, afectaciones derivadas de las aspersiones aéreas de glifosato entre otros (France 24, 2021). Según Human Rights Watch (2020), el gobierno colombiano no ha tomado suficientes medidas para proteger a defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y a otros activistas comunitarios que enfrentan amenazas de muerte y violencia generalizadas.

Por lo tanto, las demandas ciudadanas del 2019 y 2021 se destacan de manera especial por estar relacionadas con un tipo de seguridad diferente a aquella asociada a la guerra contra la insurgencia, lo anterior en el sentido que constituyen una petición de seguridad humana. Esta última, introducida en 1994 como concepto en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuestiona la tradicional visión “estadocéntrica” basada en el poder político y territorial y en la competencia militar (Collins, 2013: 106). En su lugar, propone al ser humano como aquello que debe ser protegido y en este sentido se busca aumentar tanto la atención como los recursos para el desarrollo y la asistencia de los más vulnerables. En esta vía, una de las nociones clave para los estudios de seguridad humana es el de “emancipación”. Ken Booth, por ejemplo, relaciona dicho concepto con estar libre de limitaciones físicas y humanas que obstaculizan la realización de lo que las personas y las comunidades libremente deseen hacer (Collins, 2013: 108). En este camino, respecto a la forma de entender la emancipación, se destacan dos enfoques que pueden ser resumidos como “estar libre de violencia” y “estar libre de necesidades”. Por un lado, la “Narrow School” hace hincapié en la protección de los sujetos y las comunidades de la violencia política que emana del Estado y de los conflictos entre grupos sociales. Por otro lado, la “Broad School” se

centra en la idea del desarrollo e incluye amenazas relacionadas con la necesidad, el mal gobierno, la incapacidad del Estado, la corrupción, las divisiones sociales, cuestiones derivadas de la tierra, etc. Ambas corrientes reconocen, por ejemplo, que la amenaza de la pobreza y las amenazas derivadas de una gobernanza débil pueden convertirse en causas interconectadas de la violencia política. Bajo estas perspectivas, el Estado podría ser reconocido como un actor que perpetúa la violencia y podría ser fuente de otras amenazas a la seguridad de las personas, convirtiéndose así en el problema principal o en parte del problema mismo (Collins, 2013: 107).

Con el propósito de analizar diferentes factores atribuibles a la idea de seguridad humana, organizaciones no gubernamentales publican y mantienen evaluaciones periódicas del estado de la libertad, la democracia, la equidad, la gobernanza y el desarrollo humano en todo el mundo. Los países suelen ser calificados según diversas medidas que incluyen derechos políticos, derechos económicos y libertades civiles. El *Índice de Desarrollo Humano* (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas-ONU para el Desarrollo (PNUD) mide, por ejemplo, la esperanza de vida, la alfabetización, la educación y la calidad de vida de los países. Basándose en el IDH, la ONU hace hincapié en la necesidad de mejorar la vida de las personas mediante la creación de oportunidades, pero reconociendo siempre el poder que tienen esas personas para elegir libremente, entre esas oportunidades, la vida que desean vivir. En otras palabras, el desarrollo humano se ocupa fundamentalmente de generar opciones sin obligar a nadie a que las tome. En este sentido define el progreso no exclusivamente a partir del crecimiento económico y el producto interno bruto, sino también a partir de las oportunidades y libertades personales que permiten vivir en dignidad (PNUD, 2019).

América Latina enfrenta grandes desafíos estructurales en cuanto a la generación de dichas opciones de vida digna. La región se caracteriza por las extremas desigualdades, los altos niveles de endeudamiento, el desempleo y la elevada informalidad que tienen consecuencias especialmente graves para las mujeres, los jóvenes y las poblaciones más vulnerables del continente, como los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes y los refugiados. Según la cuarta edición del Informe Regional de Desarrollo Humano, América Latina muestra un bajo nivel de efectividad de las políticas de protección social, esto en la medida en que se privilegian soluciones a corto plazo para combatir los desafíos de la alta desigualdad y la baja productividad. Lo anterior tiene como consecuencia que las respuestas de las políticas tiendan a ser fragmentadas e inefectivas: “En lugar de actuar ex ante para prevenir la pobreza, las políticas reaccionan ex post para mitigarla una vez que está presente” (PNUD, 2021: 18).

Con base en el mismo informe, Colombia enfrenta varios retos en materia de desarrollo humano. A nivel global, con un puntaje de 0,767, el país se ubica en el puesto 83, retrocediendo cuatro casillas en relación al 2019 cuando se ubicó en el puesto 79. El informe presenta un panorama que merece ser analizado. Por ejemplo, señala que la brutalidad y los abusos policiales siguen siendo un problema importante en la región y se menciona especialmente a Colombia como uno de los casos críticos. Otro dato alarmante

es el creciente apoyo popular al uso de la violencia extrajudicial como forma válida de resolver conflictos, lo que refleja bajos niveles de confianza en las instituciones (PNUD, 2021). Según el Informe Latinobarómetro 2021, al igual que en el resto de América Latina, Colombia registra veinte puntos porcentuales menos de confianza en las instituciones elegidas por voto popular que en Asia, África, países árabes y Eurasia (Corporación Latinobarómetro, 2021: 62).

En cuanto a la segregación y la desigualdad en Colombia, los logros en la protección de los derechos de las personas LGTBIQ+, de acuerdo al informe, contrastan con los altos niveles de discriminación y violencia. El porcentaje de personas transgénero que tienen un empleo formal se acerca al 5 por ciento, muy por debajo de la media nacional, que es de aproximadamente el 40 por ciento. Las mujeres pobres, por su parte, tienen más probabilidades de sufrir violencia doméstica que las no pobres. La mayoría de los líderes asesinados en Colombia entre 2017 y 2019 eran afrodescendientes, indígenas, trabajadores rurales o representantes sindicales. Además, la proporción de víctimas de abuso policial entre los grupos de bajos ingresos o las minorías étnicas es mayor en comparación con el resto de la población (PNUD, 2021: 33).

Otro índice de interés para hablar de seguridad humana en Colombia son los indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial. En primer lugar, resulta necesario aclarar que la gobernabilidad está vinculada a las instituciones y tradiciones a través de las cuales se ejerce la autoridad pública en un país. En este sentido, se asocia a la capacidad de las instituciones para ejercer esta autoridad y promover un desarrollo económico, social y político sostenible (Alcántara – Marín, 2013: 96). Según el Instituto del Banco Mundial (2020), los aspectos que afectan a la gobernanza pueden dividirse en seis componentes: 1. Voz y rendición de cuentas, 2. Control de la corrupción, 3. Estabilidad política y ausencia de violencia, 4. Eficacia del gobierno, 5. Estado de derecho, y 6. Calidad regulatoria. Entre los países de la región, Colombia está por debajo de la media en 4 de los 6 indicadores mencionados, presentando cifras considerablemente bajas en estabilidad política y ausencia de violencia, lo que se explica en parte por el conflicto armado interno y los múltiples actos de violencia derivados de las acciones cometidas por el crimen organizado.

Pasando a otro indicador, durante el 2019, año previo a la pandemia del COVID-19, el nivel de desigualdad en Colombia, medido por el coeficiente de Gini, fue de 0,53 (Banco mundial, 2021a), el segundo más alto de la región (solo superado por Brasil) y el más alto entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) conocido como el “club de los países ricos” del que Colombia es miembro desde 2020. El principal reto en relación con la desigualdad en el país es la movilidad social entre generaciones. Según el informe presentado por el Banco Mundial, entre los 75 países para los que se disponen datos, Colombia ocupa el primer lugar respecto a tener las tasas más altas de persistencia de la desigualdad entre una generación y la siguiente (Banco Mundial, 2021a: 9). Para Mark Thomas, director del Banco Mundial para Colombia, México y Venezuela, sobre el caso colombiano “la educación y los

ingresos de los padres determinan en mayor medida que en otros lugares las oportunidades de educación e ingresos de sus hijos” (Portafolio, 2021). El informe también concluye que las tasas de pobreza son significativamente más altas en los hogares rurales, los migrantes, los indígenas y los afrodescendientes:

[...] Un colombiano nacido en el Chocó¹ tiene cinco veces más probabilidades de nacer en la pobreza que uno nacido en Bogotá. Asimismo, una mujer en Colombia tiene 1,7 veces más probabilidades de estar desempleada que un hombre. Un indígena colombiano alcanza de media dos años menos de escolarización que uno no indígena [...] (Banco Mundial, 2021b: 9).

Estos índices son presentados con el fin de retomar la discusión sobre la violencia estructural planteada por los estudios sobre seguridad humana. Lo anterior en la medida en que dicha violencia se refiere precisamente a las situaciones en las que se causan daños a necesidades humanas básicas como la supervivencia, la libertad, el bienestar o la identidad. Generalmente, está involucrado un grupo privilegiado y un grupo vulnerable que suele ser caracterizado en términos de clase, raza o género (Cabrera, 2018). Para Juan David Cabrera, profesor de Derechos Humanos, Género y Raza de la Universidad de Los Andes-Colombia, visibilizar la violencia estructural resulta crucial para entender los fenómenos de violencia directa que se producen cuando el grupo privilegiado busca reforzar su posición, o cuando el grupo vulnerable busca subvertirla. De esta manera, hechos lamentables como el asesinato de miles de líderes sociales, que se ha convertido en una constante en Colombia, o los continuos asesinatos de personas LGTBQ+, podrían ser caracterizados según el profesor como formas de violencia directa derivadas de la violencia estructural. Líderes sociales son asesinados por exigir condiciones de vida dignas, o por exigir conocer la verdad en los casos de restitución de tierras, mientras que las personas LGTBQ+ son asesinadas por pertenecer a una comunidad cuya orientación sexual ha sido históricamente discriminada (Cabrera, 2018).

Como enfatiza Martha Nussbaum, las personas y comunidades que viven en condiciones infrahumanas han de enfrentarse constantemente a opciones trágicas, por ejemplo, elegir entre enviar a sus hijos a la escuela o, para garantizar la propia supervivencia, incorporarlos a la economía familiar. En estos casos, todas las opciones disponibles implican alguna vulneración que en una sociedad totalmente justa ninguna persona tendría que soportar (Nussbaum – Santos, 2012: 57). Lo expuesto por Nussbaum permite resaltar que además de la violencia política característica del caso colombiano que afecta a los sectores más vulnerables, las poblaciones también sufren a diario violencia estructural. En este sentido, para quienes sólo tienen una comida al día y al

¹ Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANEa, 2022), el departamento del Chocó presenta los mayores índices de pobreza de Colombia y es también el departamento con mayor porcentaje de población afrodescendiente del país.

mismo tiempo son segregados por su condición étnica u otros factores relacionados por ejemplo con su identidad, el sistema social, político y económico que en lugar de protegerlos los excluye, no es un sistema compatible con el derecho a una vida digna.

4. Conclusión

El concepto de seguridad nacional en Colombia ha estado ligado al conflicto armado interno como principal medida que define los problemas, las amenazas y orienta la construcción doctrinal de las fuerzas armadas del país. Después de los acuerdos de paz, la violencia no ha dejado de estar presente en la realidad nacional, sigue vivenciándose a través de diversas manifestaciones de violencia política. Sin embargo, la violencia también hace presencia en forma de manifestantes reprimidos, asesinatos de líderes sociales, la corrupción, barrios empobrecidos, actividades de la guerrilla del ELN que sigue activa, así como de algunas fracciones de las FARC y de grupos paramilitares. Por lo tanto, la paz va más allá de los acuerdos alcanzados en 5 años destinados a acabar con la violencia que amenaza la supervivencia física. Difícilmente se puede hablar de paz si las condiciones de inequidad y pobreza se siguen reproduciendo estructuralmente en torno a un modelo económico comprometido con el narcotráfico y el gran capital transnacional. De ahí la importancia de incluir el concepto de Seguridad Humana, una visión amplia y multidimensional de la seguridad que comprende la salud, la educación, factores ambientales, la participación ciudadana, entre otros elementos relacionados con un ser que se ve afectado por los riesgos del desarrollo y la exclusión que este genera para una parte de la población que reclama la presencia del Estado, aquel que solo llega a sus territorios en forma de fuerza militar cuando la soberanía se ve amenazada, pero no lo hace a través de políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida que podrían evitar que estas poblaciones se vean inmersas en dinámicas de la guerra ya sea reclutados por grupos armados o en la siembra de cultivos ilícitos. En suma, la guerra no se reduce a dejar de matarse, también mata el hambre, el abandono y la indiferencia que abundan en la nación colombiana. De ahí el sentido que cobra la denuncia que se hace en una canción de *Creole*, grupo de música caribe del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, otro territorio que ha sido objeto de todo tipo de muestras de apatía y abuso: “Paña man lucha por el dominio/ viviendo en un territorio ancestral/ se supone que la tierra es la herencia de nuestros abuelos. En algún lugar y de alguna manera hemos perdurado/ nos mantienen hambrientos, nos mantienen peleando”².

² Letra tomada de la columna de Anna Bejarano (2021) para la revista *Cambio*.

Referencias bibliográficas

- Alcántara, Armando – Marín, Verónica (2013). Gobernabilidad, democracia y ciudadanía: su contribución a la equidad y a la cohesión social en América Latina. *Revista iberoamericana de educación superior*, 4(10). 93-112. DOI: 10.1016/S2007-2872(13)71926-7
- ACNUR (2021). Tendencias mundiales. Desplazamiento forzado en 2020. *Organización de las Naciones Unidas*. Asequible en: <https://www.acnur.org/60cbddfd4.pdf>, fecha de consulta: 10-05-2022.
- Basset, Yann (2018). Claves del rechazo del plebiscito para la paz en Colombia. *Political Studies*, 52. 241-265. DOI: 10.17533/udea.espo.n52a12
- Banco Mundial (2020). Indicadores mundiales de gobernabilidad (WGI). *Banco de datos del Grupo Banco Mundial*. Asequible en: <https://databank.bancomundial.org/Governance-Indicators/id/2abb48da>, fecha de consulta: 22-05-2022.
- Banco Mundial (2021a). Índice de Gini 2020. *Banco de datos del Grupo Banco Mundial*. Asequible en: <https://data.worldbank.org/indicador/SI.POV.GINI>, fecha de consulta: 10-05-2022.
- Banco Mundial (2021b). Construyendo una sociedad equitativa en Colombia. *Grupo Banco Mundial*. Asequible en: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/602591635220506529/pdf/Main-Report.pdf>, fecha de consulta: 10-05-2022.
- Bejarano, Ana (2021). Paña Man. *Revista Cambio*. Asequible en: <https://cambiocolombia.com/opinion/los-danieles/pana-man>, fecha de consulta: 25-05-2022.
- Caballero, Carlos (2019). Una visión retrospectiva de dos crisis financieras de los últimos cuarenta años en Colombia. *Revista Desarrollo y Sociedad*, 82. 133-165. DOI: 10.13043/dys.82.5
- Cabrera, Juan (2018). Violencia estructural: la cara oculta de la violencia. *Dejusticia, Centro de Derecho, Justicia y Sociedad*. Asequible en: <https://www.dejusticia.org/responsible/juan-david-cabrera/>, fecha de consulta: 25-05-2022.
- CNMH (2021). El conflicto armado en cifras. *Observatorio de Memoria y Conflicto*. Asequible en: <http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/portal-de-datos/el-conflicto-en-cifras/>, fecha de consulta: 13-01-2022.
- Collins, Alan, ed (2013). *Contemporary security studies*. Gosport: Oxford University Press.
- Corporación Latinobarómetro (2021). Informe Latinobarómetro 2021. *Corporación Latinobarómetro*. Asequible en: <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>, fecha de consulta: 13-01-2022.
- Cruz, Adolfo – Rojas, Diana (2008). El narcotráfico en Colombia. Pioneros y Capos. *Historia y espacio*, 4 (31). DOI: 10.25100/hye.v4i31.1680

- DANE (2022a). *Información Nacional de pobreza monetaria 2021*. Asequible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria>, fecha de consulta: 10-05-2022.
- DANE (2022b). *Empleo y desempleo*. Asequible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>, fecha de consulta: 21-06-2022.
- France 24 (2021). La violencia causa malnutrición en indígenas y afros en Colombia, afirma un estudio. *France 24*. Asequible en: <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210410-la-violencia-causa-malnutrici%C3%B3n-en-ind%C3%ADgenas-y-afros-en-colombia-afirma-un-estudio>, fecha de consulta: 22-05-2022.
- Human Rights Watch (2020). Colombia, Events of 2020. *HRW*. Asequible en: <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/colombia>, fecha de consulta: 13-01-2022.
- Jiménez, Valeria (2021). Génesis de una sensibilidad política en tiempos convulsos: narrativas juveniles sobre las protestas en Colombia en los años 2019–2021. *Repositorio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana*. Asequible en: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/57798>, fecha de consulta: 25-05-2022.
- Nussbaum, Martha Craven – Santos, Albino (2012). *Creando capacidades*. Madrid: Paidós.
- Movimiento Campesino Internacional (2021). El conflicto armado colombiano se reactiva en 2021. *La vía campesina*. Asequible en: https://viacampesina.org/es/se-reactiva-el-conflicto-armado-colombiano-en-2021/#_ftn1, fecha de consulta: 13-01-2022.
- Muñoz, Mónica (2019). Crímenes y parapolítica en Colombia en el siglo XXI. *Repositorio Universidad Nacional de La Plata*. Asequible en: <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1799/te.1799.pdf>, fecha de consulta: 15-05-2022.
- Latinobarómetro (2021). Corporación Latinobarómetro Informe 2021, adiós a Macondo. *Corporación Latinobarómetro*. Asequible en: <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>, fecha de consulta: 15-01-2022.
- PARES (2020). Seguridad en tiempos de pandemia. Legados de la guerra y el crimen organizado en Colombia. *Fundación Paz y Reconciliación*. Asequible en: <https://www.pares.com.co/post/un-balance-de-la-guerra-y-el-crimen-en-colombia>, fecha de consulta: 15-01-2022.
- Pereira, Isabel – Cruz, Luis (2022). Duque deja a Colombia en un camino autoritario. *The Washington Post*, 17 de mayo de 2022. Asequible en: <https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/05/17/elecciones-colombia-2022-ivan-duque-aprobacion-autoritarismo-petro/>, fecha de consulta: 22-05-2022.
- PNUD (2019). Desarrollo humano reformulado. *Human Development Report Office*. Asequible en: <https://www.undp.org/es/blog/desarrollo-humano-reformulado>, fecha de consulta: 22-05-2022.

Retos a la seguridad humana en Colombia

PNUD (2021). Panorama del informe regional sobre Desarrollo Humano 2021. Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)*. Asequible en: <https://www.undp.org/es/latin-america/publications/informe-regional-de-desarrollo-humano-atrapados-alta-desigualdad-y-bajo-crecimiento-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe>, fecha de consulta: 10-05-2022.

Portafolio (2021). Colombia, el segundo país más desigual de América Latina. *Diario Portafolio*, 27. Asequible en: <https://www.portafolio.co/economia/gobierno/colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-segun-el-banco-mundial-557830>, fecha de consulta: 10-05-2022.

Segrelles, José (2018). Desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia: Principal obstáculo para una paz duradera y democrática. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 38(2). 409-433. DOI: 10.5209/AGUC.62486